



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 03/12/2020

Radicado	08001-33-33-014-2020-00147-00
Medio de control o Acción	Tutela (Incidente de Desacato)
Demandante	Zenaida Segunda Mercado De Aguas
Demandado	Administradora Colombiana de Pensiones; AFP Protección
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, manifestándole que la entidad incidentada rindió el informe solicitado.

PASA AL DESPACHO
Para decidir sobre incidente de desacato

CONSTANCIA
Expediente digital, memorial de fecha 27 de noviembre de 2020, suscrito por la entidad incidentada Colpensiones enviado al correo electrónico del despacho el 28 de noviembre de 2020.

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, tres (03) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicado	08001-33-33-014-2020-00147-00
Medio de control o Acción	Tutela (Incidente de Desacato)
Demandante	Zenaida Segunda Mercado De Aguas
Demandado	Administradora Colombiana de Pensiones; AFP Protección
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Procede el Despacho a resolver el incidente de desacato instaurado por la señora Zenaida Segunda Mercado De Aguas, por el incumplimiento de la sentencia de tutela de fecha 13 de octubre de 2020, por medio del cual el H. Tribunal Administrativo del Atlántico con ponencia del Magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, revocó la decisión adoptada por este Despacho y tuteló su derecho fundamental de petición.

FUNDAMENTO DEL INCIDENTE DE DESACATO

Con escrito radicado 23 de octubre de 2020, la señora Zenaida Segunda Mercado de Aguas actuando por intermedio de apoderado, manifiesta que acude al trámite incidental con el fin de que la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, cumpla lo resuelto en el fallo de tutela radicado **2020-00147-00**, proferido el 13 de octubre de 2020, por el H. Tribunal Administrativo del Atlántico, que revocó la decisión adoptada por este Despacho.

Revisado el texto de la sentencia, se observa que lo ordenado, en el fallo fue del siguiente tenor:

“(…)

“SEGUNDO: ORDENAR a Colpensiones que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, profiera una respuesta de fondo a la petición presentada por la señora Zenaida Segunda Mercado de Aguas, identificada con cédula de ciudadanía 32.621.739, el 31 de julio de 2020”.

(…)”

- Trámite del incidente de desacato

Con escrito radicado el 23 de octubre de 2020, la accionante, presentó incidente desacato, por el incumplimiento de la sentencia adiada 13 de octubre de 2020, proferida por el H. Tribunal Administrativo del Atlántico, a través del cual revocó la decisión proferida por este Despacho y se tuteló el derecho fundamental de petición a la señora Zenaida Segunda Mercado de Aguas.

El 26 de octubre de 2020, se profirió auto que ordenó requerir al doctor CESAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, Director de Historia Laboral de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, o quien haga sus veces, con el fin que informaran de qué manera dio cumplimiento a la sentencia de tutela de fecha 13 de octubre de 2020, proferida



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

por el H. Tribunal Administrativo del Atlántico por medio del cual se tuteló el derecho fundamental de petición a la señora Zenaida Segunda Mercado De Aguas, en caso de no haberlo hecho, conminándole para que procedieran a dar cumplimiento de inmediato a lo ordenado en dicha providencia, e informaran cuál era el conducto regular que se surte al interior de la entidad cuando recepcionan los oficios para la notificación personal de los incidentes de desacato.

La entidad AFP Protección, dio respuesta a pesar de no haber sido requerida en el auto, y sostuvo que nuevamente para validación del despacho envía un certificado de aportes trasladados emitido por esta AFP, donde consta que respecto de los periodos consultados y/o requeridos a Colpensiones para actualización de historia laboral de la señora ZENaida SEGUNDA MERCADO DE AGUAS, esto es julio de 1995 a 1998, Protección S.A., trasladó efectivamente todos los saldos que le eran correspondientes desde hace varios años y no ha recibido petición.

Por su parte la entidad incidentada Colpensiones no respondió al requerimiento que se hiciera mediante auto.

Frente a tal circunstancia, este Juzgado mediante providencia de fecha 10 de noviembre de 2020, requirió nuevamente al doctor CESAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, Director de Historia Laboral de la Gerencia de Gestión de la Información de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, a fin que informaran de qué manera habían dado cumplimiento al fallo de tutela de fecha 13 de octubre de 2020 por medio del cual se tuteló el derecho fundamental de petición a la accionante.

En el precitado auto, se abrió formalmente incidente de desacato en contra del doctor CÉSAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, Director de Historia Laboral de la Gerencia de Gestión de la Información de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por el incumplimiento del fallo de tutela de fecha 13 de octubre de 2020, proferida por el H. Tribunal Administrativo del Atlántico por medio del cual revocó la decisión de este Despacho y tuteló el derecho fundamental de petición a la señora Zenaida Segunda Mercado De Aguas.

Mediante mensaje remitido al buzón de correo electrónico notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, el Secretario de esta Agencia Judicial notificó personalmente, la providencia de fecha 10 de noviembre de 2020, proferida por este Despacho, por medio de la cual se abrió formalmente incidente de desacato en su contra.

Del requerimiento anterior, la doctora Malky Katrina Ferro Ahcar, Directora (A) de Acciones Constitucionales de COLPENSIONES dio respuesta en los siguientes términos:

POSICIÓN DE LA ENTIDAD INCIDENTADA

Administradora Colombiana de Colpensiones

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–, a través de escrito de fecha 27 de noviembre de 2020, informó que:

“la Dirección de Historia Laboral mediante oficio BZ 2020_11056296 del 30 de octubre de 2020, ha dado cumplimiento al fallo de tutela, oficio que fue enviado a la dirección Carrera 44 N° 40-20 Oficina 303 Correo: feixmer@hotmail.com Barranquilla, Atlántico, mediante guía No MT675418074CO de la empresa de mensajería 472. Conforme a lo mencionado, vulneración de los derechos fundamentales del accionante se encuentra superada, en tanto a que esta



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Administradora dio cumplimiento a la orden de tutela. Me permito informarle Señor Juez que COLPENSIONES procedió a dar respuesta de fondo, clara y congruente a la accionante y en la cual informa que, de acuerdo con su petición y con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial, nos permitimos indicar que se han realizado los procesos de actualización correspondiente y a la fecha los ciclos de 1995-06 a 1998-07 con el empleador DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA identificado con NIT 890102018, se encuentran acreditados correctamente en la historia laboral AFP PROTECCIÓN. Por lo anterior, se adjunta la historia laboral unificada actualizada”.

Para evidenciar lo informado, Colpensiones, arrió al expediente escrito dirigido a la señora Zenaida Segunda Mercado De Aguas enviado mediante oficio No. BZ 2020_11056296 del 30 de octubre de 2020, en el cual le informa que se han realizado los procesos de actualización correspondiente y a la fecha los ciclos de 1995-06 a 1998-07 con el empleador DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, y que se encuentran acreditados correctamente en la historia laboral del ciudadano referenciado conforme al traslado de aportes y a la información remitida por la AFP PROTECCIÓN.

El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente:

“Art. 52.- Desacato. La persona que incumpliere la orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto de hasta seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.”

En correspondencia con lo antes expuesto, el mismo decreto en su artículo 52, señaló como una herramienta para garantizar el cumplimiento de la sentencia de tutela, y por consiguiente de los derechos fundamentales, que aquél que incumpliere la orden de un juez proferida incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, que será impuesta por el juez que dictó la decisión mediante trámite incidental, y consultada al superior jerárquico quien decidirá sobre la legalidad de la misma.

Sobre la naturaleza de dichos poderes, que se justifican por razones de interés público, la H. Corte Constitucional en sentencia C-218 de 1996 expresó lo siguiente:

“El juez como máxima autoridad responsable del proceso, está en la obligación de garantizar el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes en él actúan y obviamente de la sociedad en general, pues su labor trasciende el interés particular. Para ello el legislador lo dota de una serie de instrumentos que posibilitan su labor, sin los cuales le sería difícil mantener el orden y la disciplina que son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen situaciones en las que predominan conflictos de intereses.”

Aunque el incidente de desacato es una institución distinta al cumplimiento, a través de éste es posible conjurar las acciones u omisiones que amenazan o quebrantan los derechos fundamentales tutelados, razón por la cual su finalidad más que sancionar al responsable del cumplimiento, es garantizar que se respeten los fallos que amparan estos derechos, sin que ello quiera decir que



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

el incidente de desacato constituya el único mecanismo de cumplimiento de las sentencias de tutela.

Sobre el incumplimiento de los fallos judiciales el alto tribunal Constitucional ha expresado¹:

“Ha de partirse del supuesto de que el orden jurídico fundado en la Constitución no podría subsistir sin la debida garantía del acatamiento a los fallos que profieren los jueces. Ellos han sido revestidos de autoridad suficiente para resolver los conflictos que surgen en los distintos campos de la vida en sociedad y, por tanto, constituyen elemento fundamental de la operatividad y eficiencia del Estado de Derecho.

En el caso de los derechos fundamentales, de cuya verdadera eficacia ha querido el Constituyente ocuparse en forma reiterada, el desacato a las sentencias judiciales que los reconocen es en sí mismo un hecho flagrantemente violatorio del Ordenamiento fundamental.

Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales.

De allí se desprende necesariamente que si la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión de las que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la defensa efectiva del derecho constitucional conculcado.

(...)

Por tanto, cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado. Por ello es responsable y debe ser sancionado, pero con su responsabilidad y sanción no queda satisfecho el interés subjetivo de quien ha sido víctima de la violación a sus derechos, motivo por el cual el sistema tiene que propiciar, de manera indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal realización”.

En relación con el desacato, la Corte Constitucional ha indicado:

“El desacato consiste en incumplir cualquier orden proferida por el juez con base en las facultades que se le otorgan dentro del trámite de la acción de tutela y con ocasión de la misma (...) La facultad del juez de imponer la sanción por el incumplimiento de tal orden debe entenderse inmersa dentro del contexto de sus poderes disciplinarios, asimilables a los que le concede al juez civil el numeral 2 del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil.

¹Sentencia T-1686 del 6 de diciembre de 2000



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Sobre la naturaleza de dichos poderes, que se justifican por razones de interés público, expresó esta corporación, en el reciente fallo C-218 de 1996 lo siguiente: “El juez como máxima autoridad responsable del proceso, está en la obligación de garantizar el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes en él actúan y obviamente de la sociedad en general, pues su labor trasciende el interés particular. Para ello el legislador lo dota de una serie de instrumentos que posibilitan su labor, sin los cuales le sería difícil mantener el orden y la disciplina que son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen situaciones en las que predominan conflictos de intereses.”²

Para imponer las sanciones previstas para los que incumplen un fallo de tutela, la Corte Constitucional ha distinguido dos elementos de responsabilidad; uno objetivo y otro subjetivo. En sentencia T- 512 de 2011, se dijo:

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-
Responsabilidad objetiva y subjetiva

“Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los principios del derecho sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.”

De lo anterior se puede afirmar que el elemento objetivo se refiere al incumplimiento del fallo en sí, y el subjetivo hace relación con la persona responsable de dar cumplimiento al fallo.

Caso en concreto.

En el caso bajo estudio, se hace necesario destacar que lo que motivó a la accionante a interponer la acción de tutela de la referencia en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, estuvo en la vulneración del derecho fundamental de petición, ante la no respuesta de fondo a la petición de fecha 31 de julio de 2020, en el sentido que esta última incluyera en su historia laboral los aportes por concepto de pensión del periodo comprendido del 1º de junio de 1995 al 31 de julio de 1998 que fueron trasladados por el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a la susodicha entidad, el H. Tribunal Administrativo del Atlántico decidió tutelar el mencionado derecho por considerar que dicha entidad se encontraba vulnerándolo.

Es preciso indicar, que el trámite que se surtió dentro del presente incidente de desacato se llevó a cabo dentro del marco de las garantías procesales, teniendo en cuenta como fuera señalado en el recuento procesal, que mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2020, se dispuso abrir incidente en contra del doctor CÉSAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, Director de Historia Laboral de la Gerencia de Gestión de la Información de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, con la orden respectiva de notificación personal, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción dentro del mismo.

²Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C- 243 de 1996.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, como se mencionó respondió al requerimiento mediante memorial de fecha 27 de noviembre de 2020, enviado al buzón del correo electrónico del Despacho el día 28 de noviembre de 2020, en el que da cuenta que respondió a la petición, aportando al plenario la siguiente documentación:

- Memorial de fecha 27 de noviembre de 2020, por medio del cual la doctora Malky Katrina Ferro Ahcar, responde al requerimiento que hiciere este Despacho mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2020.
- Oficio No. 2020_11056296 de fecha 30 de octubre de 2020, signado por el doctor Cesar Alberto Méndez Heredia, por medio del cual responde a la señora Zeneida Segunda Mercado De Aguas, la petición de fecha 31 de julio de 2020.
- Guía de Envío No. MT6751807CO radicado 2020_11056296 de la empresa 4/72 entregado el día 04 de noviembre de 2020, al destinatario señora Zenaida Segunda Mercado De Aguas.
- Reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado a 30 de octubre de 2020 a nombre de la señora Zenaida Segunda Mercado De Aguas.

Analizadas las pruebas allegadas al expediente del presente trámite incidental, se observa efectivamente, que la entidad incidentada realizó las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo de tutela de fecha 13 de octubre de 2020, en ese sentido, Colpensiones dio respuesta a la petición de fecha 31 de julio de 2020 sobre corrección de historia laboral, en el escrito de respuesta se indica que realizaron los procesos de actualización correspondientes y a la fecha los ciclos de 1995-06 a 1998-07 con el empleador Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla identificado con NIT 890102018, los cuales se encuentran acreditados correctamente en la historia laboral de la señora Zenaida Segunda Mercado De Aguas, conforme al traslado de aportes y a la información remitida por la AFP Protección.

Ahora bien, con el trámite incidental se pretende el cumplimiento del fallo de tutela por parte de quien está obligado a hacerlo. En el asunto sub examine, se advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, dio cumplimiento al fallo proferido, dándole respuesta de fondo al derecho de petición presentado por la accionante, lo que quedó demostrado en el trámite del presente incidente de desacato, con las pruebas arrojadas al expediente, arriba mencionadas.

Atendiendo lo expuesto anteriormente, el Despacho concluye que, aunque es evidente que la entidad incidentada cumplió de manera tardía, no puede el Despacho continuar con el incidente de desacato iniciado, pues carece de fundamento y no procede sanción alguna contra el funcionario de la entidad accionada e incidentada, tal como se resolverá.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

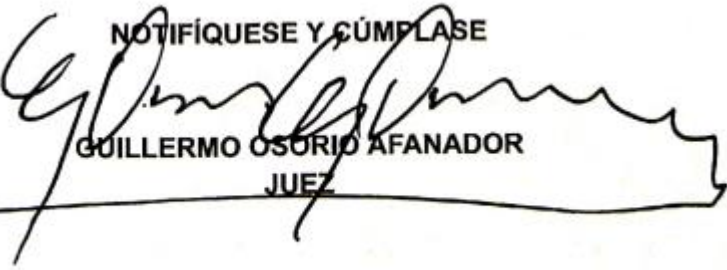
PRIMERO. - DAR POR TERMINADO el incidente de desacato iniciado en contra del doctor CÉSAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, Director de Historia Laboral de la Gerencia de Gestión de la Información de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES_, por encontrarse cumplida la orden proferida en el fallo de tutela de fecha 13 de octubre de 2020.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

SEGUNDO. - NO IMPONER SANCIÓN alguna en contra del doctor CÉSAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, Director de Historia Laboral de la Gerencia de Gestión de la Información de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído.

TERCERO. - Una vez notificada la presente decisión, archívese el expediente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 137 DE HOY 04/12/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA